

Pereira Risaralda, 25 de febrero de 2026

QUEJA ANÓNIMA

Asunto: Solicitud de apertura de proceso disciplinario contra el señor Anyelo Duván Rojas Mazuera identificado con C.C 18.523.554

Señores

Oficina de Control Interno Disciplinario – Alcaldía de Pereira

Alcaldía de Pereira

Secretaría de Cultura de Pereira

Personería Municipal de Pereira

Procuraduría Provincial de Pereira

Ciudad

Respetados señores:

En ejercicio del derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, y actuando bajo reserva de identidad por razones de seguridad personal, me permito presentar **QUEJA FORMAL** contra el señor **Anyelo Duván Rojas Mazuera** identificado con C.C 18.523.554, persona vinculada actualmente a la Secretaria de Cultura de la ciudad de Pereira Risaralda, con el fin de que se adelanten las investigaciones disciplinarias, administrativas y, de ser procedente, se compulsen copias a la autoridad penal competente.

I. HECHOS

1. Se tiene conocimiento reiterado de que el señor Anyelo Duván Rojas Mazuera presuntamente ha incurrido en conductas sistemáticas de malos tratos, agresiones verbales, amenazas y violencia psicológica en contra de mujeres de su entorno cercano, incluyendo pareja sentimental, exparejas y miembros de su núcleo familiar. Según lo que se conoce, no se trataría de hechos aislados o episodios circunstanciales, sino de un patrón de comportamiento repetitivo caracterizado por el uso de lenguaje soez, expresiones humillantes, descalificaciones constantes, intimidaciones y manifestaciones de

control o dominación que afectan gravemente la dignidad humana de las personas involucradas.

Estas conductas presuntamente incluyen amenazas directas e indirectas, gritos, ofensas degradantes y ataques orientados a menoscabar la autoestima y estabilidad emocional de las víctimas, configurando lo que podría encuadrarse como violencia psicológica y verbal. La reiteración de este tipo de comportamientos genera un entorno de temor, afectación emocional y vulnerabilidad, particularmente grave cuando las víctimas son mujeres, dado el marco constitucional y legal colombiano que establece una protección reforzada frente a la violencia basada en género.

Se ha conocido, además, que existen registros de audio que respaldarían lo aquí manifestado, en los cuales presuntamente se evidencian expresiones ofensivas, intimidatorias y potencialmente amenazantes. Dichos elementos podrían constituir prueba relevante para establecer la existencia de un comportamiento reiterado de agresión verbal y psicológica, lo cual amerita su valoración dentro del proceso disciplinario correspondiente.

Aunque parte de estos hechos podrían haberse desarrollado en el ámbito interpersonal o privado, ello no excluye su relevancia institucional cuando quien incurre en tales comportamientos ostenta o aspira a ostentar una vinculación con una entidad pública. El ejercicio de funciones públicas exige no solo idoneidad técnica, sino también comportamiento acorde con los principios de dignidad humana, respeto, moralidad y convivencia pacífica. El artículo 1 de la Constitución define a Colombia como un Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, y el artículo 2 impone a las autoridades el deber de proteger a todas las personas en su vida, honra e integridad.

La presunta reiteración de conductas de amenaza, maltrato y agresión hacia mujeres y familiares no puede considerarse un asunto meramente privado cuando compromete la imagen institucional, la confianza pública y la coherencia ética que debe caracterizar a quienes se desempeñan en el servicio público. De confirmarse estos hechos, podrían evidenciar un patrón de conducta incompatible con los deberes de respeto, buen trato y comportamiento ejemplar exigibles a servidores públicos o contratistas del Estado.

- 2.** Adicionalmente de toda esta situación, se tiene conocimiento de que el señor Anyelo Duván Rojas Mazuera presuntamente habría presentado o utilizado documentación académica que no correspondería a la realidad, específicamente un diploma de graduación de bachillerato cuya autenticidad genera serias dudas. Según la información conocida, dicho documento habría sido empleado para acreditar el cumplimiento de requisitos académicos exigidos para acceder a determinada formación, certificación, vinculación laboral o contractual, lo cual, de confirmarse, constituiría una conducta de extrema gravedad tanto en el ámbito disciplinario como en el penal.

La posible utilización de documentación falsa para obtener beneficios académicos o laborales no solo representa un engaño a la administración pública, sino que vulnera los principios de buena fe, transparencia y moralidad que rigen la función pública. La administración está obligada a actuar bajo el principio de confianza legítima, presumiendo la buena fe de los particulares; sin embargo, cuando esta confianza es defraudada mediante la presentación de documentos presuntamente falsos, se afecta directamente la legalidad de los actos administrativos derivados de dicha acreditación.

En caso de comprobarse la falsedad del diploma o la adulteración de información académica, podrían configurarse conductas punibles como falsedad en documento público o privado y fraude, además de posibles inhabilidades para ejercer funciones públicas o contratar con el Estado. Esta situación también podría generar la nulidad de cualquier acto administrativo o contractual que se hubiese sustentado en el cumplimiento de requisitos académicos inexistentes o alterados.

Resulta particularmente grave que una persona que presuntamente haya accedido a oportunidades laborales o académicas mediante documentación irregular pueda estar desempeñando funciones dentro de una entidad pública, pues ello compromete la legitimidad institucional y el principio de mérito que debe regir el acceso al servicio público. El ingreso o permanencia en el Estado debe basarse en criterios objetivos y verificables; cualquier alteración de estos constituye un atentado contra la igualdad de oportunidades y la transparencia administrativa.

Por lo anterior, se solicita que dentro de la investigación disciplinaria se verifique exhaustivamente la autenticidad de los documentos académicos presentados por el señor Anyelo Duván Rojas Mazuera, solicitando certificaciones directas a la institución educativa correspondiente y revisando los archivos administrativos donde reposen dichos soportes. De encontrarse inconsistencias, se deberá proceder conforme a la ley, incluyendo la eventual compulsión de copias a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.

3. Así mismo, se tiene conocimiento de manera reiterada que el señor Anyelo Duván Rojas Mazuera presuntamente ha asistido a su lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos del consumo de bebidas alcohólicas y/o psicoactivas. Esta situación, de ser verificada, constituiría una conducta gravemente reprochable en el ejercicio de funciones públicas o en el cumplimiento de obligaciones contractuales con el Estado, toda vez que compromete la idoneidad, la responsabilidad y el decoro que deben caracterizar a quienes prestan sus servicios en entidades oficiales. El desempeño de funciones en estado de alteración por consumo de alcohol no solo pone en riesgo la eficiencia del servicio, sino que afecta directamente la imagen institucional y el buen nombre de la Alcaldía de Pereira ante la ciudadanía.

Se ha conocido además que dicho comportamiento habría generado conflictos y tensiones con otros funcionarios y/o colaboradores de la institución, afectando el clima laboral, el respeto entre compañeros y la armonía administrativa. El acudir en

presunto estado de embriaguez al entorno laboral puede constituir incumplimiento de los deberes funcionales, falta de respeto hacia la institución y transgresión del principio de moralidad administrativa consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política, el cual exige que la función administrativa se desarrolle con fundamento en los principios de moralidad, eficacia y responsabilidad

Adicionalmente, la reiteración de este tipo de comportamientos podría evidenciar un patrón de conducta incompatible con el ejercicio de funciones públicas, especialmente en una dependencia como la Secretaría de Cultura de Pereira, cuya labor implica contacto con la comunidad, representación institucional y promoción de valores sociales y culturales. La presencia de un funcionario o contratista en presunto estado de embriaguez no solo deteriora la confianza pública, sino que podría configurar una falta disciplinaria por incumplimiento de los deberes de comportamiento ejemplar, respeto institucional y adecuada prestación del servicio.

Por lo anterior, resulta indispensable que dentro de la investigación solicitada se verifique esta situación mediante los mecanismos probatorios pertinentes, tales como testimonios, registros internos, informes de supervisión contractual y cualquier otro medio que permita establecer la veracidad de los hechos aquí expuestos.

4. También se tiene conocimiento de que el señor Anyelo Duván Rojas Mazuera presuntamente actúa dentro de la institución como si no estuviera sujeto a los mismos horarios y normas que los demás funcionarios o contratistas. Según lo que se sabe, entra y sale a la hora que quiere, sin respetar la jornada laboral establecida. Por ejemplo, si su horario corresponde de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., se ha comentado que en varias ocasiones llega después de las 7:00 a.m. y se retira mucho antes de la hora de salida, aproximadamente entre la 1:00 p.m. y 2:00 p.m., sin que se conozca una justificación clara o permiso formal que respalde esas ausencias anticipadas.

Este comportamiento, de ser verificado, demuestra una falta de compromiso y responsabilidad con las funciones que debe desempeñar, además de generar inconformidad entre compañeros

que sí cumplen con su jornada completa. No es justo que una persona tenga privilegios o actúe con aparente libertad frente a las normas internas mientras otros deben cumplir estrictamente con sus horarios. Esto afecta el ambiente laboral, genera malestar dentro del equipo de trabajo y da una imagen negativa tanto al interior como al exterior de la entidad.

Además, cuando un funcionario o contratista no cumple con su horario de manera constante, se ve afectada la atención a la comunidad y el desarrollo normal de las actividades institucionales. La ciudadanía espera responsabilidad y seriedad de quienes trabajan en una entidad pública, y este tipo de conductas, si son ciertas, terminan afectando la credibilidad y el buen nombre de la institución.

Por esta razón, se solicita que se revise el cumplimiento real de los horarios del señor Anyelo Duván Rojas Mazuera, verificando registros de ingreso y salida, reportes internos o cualquier otro medio que permita esclarecer esta situación.

II. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

Las conductas descritas podrían vulnerar:

- **Artículo 1 de la Constitución Política:** respeto por la dignidad humana.
- **Artículo 2:** deber de las autoridades de proteger a las personas en su vida, honra y bienes.
- **Artículo 13:** derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, especialmente por razones de sexo.
- **Artículo 15:** derecho al buen nombre y a la intimidad.
- **Artículo 21:** derecho a la honra.
- **Artículo 25:** derecho al trabajo en condiciones dignas y justas.
- **Artículo 95:** deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios.

En materia disciplinaria, de comprobarse que el señor Anyelo ostenta la calidad de servidor público o contratista del Estado, sus actuaciones podrían constituir falta disciplinaria por el incumplimiento de deberes funcionales, conductas que afectan la dignidad del cargo, posible inhabilidad derivada de la presentación de documentación falsa.

Si se confirma la falsedad documental, podría configurarse además una conducta punible conforme al Código Penal Colombiano.

III. GRAVEDAD INSTITUCIONAL

Resulta especialmente preocupante que una persona con este tipo de comportamientos pueda desempeñar funciones en una entidad pública, más aún en una dependencia relacionada con procesos culturales, sociales o comunitarios.

La violencia contra la mujer es un asunto de especial protección constitucional y convencional (Convención de Belém do Pará). Las entidades públicas tienen el deber reforzado de prevenir, investigar y sancionar conductas que reproduzcan violencia de género.

Permitir que estas conductas pasen inadvertidas comprometería la imagen institucional y el deber de garantizar ambientes laborales seguros y respetuosos.

IV. SOLICITUDES

Respetuosamente solicito a ustedes:

1. Que se inicie investigación disciplinaria formal contra el señor Anyelo Duván Rojas Mazuera.
2. Que se verifique la autenticidad de los documentos académicos presentados por el mencionado señor.
3. Que se practiquen las pruebas pertinentes, incluyendo la recepción y análisis de los audios que respaldan esta denuncia.
4. Que, de encontrarse mérito, se compulsen copias a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.
5. Que se adopten medidas preventivas si se evidencia riesgo para posibles víctimas.

Solicito que la presente queja sea tramitada con la debida reserva, en garantía de la seguridad de quien la formula.

La presente denuncia se realiza de buena fe, en interés de la legalidad, la protección de las víctimas y la transparencia institucional.

Cordialmente,

QUEJA ANÓNIMA

Pereira, Colombia